

Del socialismo comunitario al “arréglate como puedas”

La manera en que reacciona el MAS ante su derrota del último referendo constitucional, induce con facilidad al engaño, puesto que no son pocos los actores políticos y observadores que, impresionados por sus manifestaciones de violencia¹, la caracterizan como una (contra) ofensiva, cuando en realidad se trata de un importante y desordenado repliegue.

El deseo de los dirigentes masistas de reponerse de su fracaso a través de actos intimidatorios y represivos no es suficiente para alterar una relación de fuerzas que sigue evolucionando en su contra, a pesar que se obstinan en negarlo y aun cuando ellos mismos lleguen a creer sus afirmaciones.

Si se observa el panorama bajo una óptica que trascienda la coyuntura, se verifica la rebaja y dilución permanente del máximo objetivo estratégico que se plantearon en un inicio – la construcción de un socialismo, tipo comunitario-, para luego declarar que los plazos de arribo a ese objetivo son muy largos o indefinidos (García L., 2014) para, finalmente, proponer un horizonte en el que lo esencial es mantener al presidente en su puesto, por los años que se pueda y al partido hasta el final de los tiempos. Dentro de ese reacomodo poco importa que la construcción del Estado Plurinacional con autonomías y control social permanezca congelada, igual que la descolonización o cualquier perspectiva de autogobierno social. Todo ello queda como una borrosa retórica que se hace cada vez más difusa y lejana.

Pero no es sólo el barullo que despliegan nuestros gobernantes, en su hora de mayor tormento, la única causa que contribuye a generar una interpretación errónea de la coyuntura y sus tendencias de evolución, sino que el apocamiento de la oposición partidista y parlamentaria, cuanto la dificultad que tienen de ubicar los hechos en un contexto histórico, participan decisivamente para fortalecer el error. Tiene idéntico resultado la gran campaña de propaganda con que el gobierno se empeña en atribuir su fracaso electoral a cuestiones completamente secundarias², obviando deliberadamente aludir a los reales problemas que enfrentamos.

La táctica de fabricar tormentas e inventar conspiraciones, desviando la atención, le ha sido tan útil a la dirigencia masista que al habituarse viciosamente a ella, ya no tiene la capacidad de discriminar cuando esta se ha vuelto en su contra .

¹ Estos equívocos se manifiestan en el temor expresado por dirigentes partidarios, activistas independientes y analistas de que la escalada represiva tienda a mantenerse, o ampliarse; en la forma en que han tomado los resultados de la “cumbre” judicial o la interpretación que hacen de las tensiones entre gobierno, sindicalistas y dirigentes de algunas organizaciones sociales, cuando suponen que se trata de una simple escenificación (“tongo”) o de roces mínimos.

² El “affaire Zapata”, supuesto causante de la derrota de febrero, que sería obra de la confabulación entre el gran complot imperialista y el “cártel mediático-político”. Aunque los opositores declaran de dientes para afuera que no comparten esa opinión, la manera en cómo se ubicaron ante esta cuestión, a través de sus declaraciones y, principalmente, su actuación en la investigación parlamentaria sobre tráfico de influencias, demuestra que la mayoría estaba –y aún sigue- convencida de lo contrario. Como las más de las veces, los partidos de oposición oscilan entre una visión exageradamente optimista del desgaste gubernamental (la mayor prueba es como afrontaron las elecciones de 2014) que subestima o sencillamente niega los logros oficiales, o, en el otro extremo, una depresión anímica, cuando creen percibir que el pueblo ha perdido sensibilidad y capacidad de reaccionar frente los abusos del gobierno.

La desaceleración económica³, producto de la merma de ingresos y recursos disponibles; las pugnas intercorporativas que afectan la base de sustento gubernamental; la lucha de poder de las facciones internas del MAS; así como la corrupción y el despliegue continuo de violencia (simbólica y material) que caracterizan a su estilo de gobierno, explican el cómo y el por qué, un porcentaje considerable de votantes que los apoyaron hace un año y medio, decidieron no respaldar la posibilidad de una nueva reelección. Así, contrariamente a los mensajes de la guerra propagandística oficial, se verifica que la proporción de electores que terminó de decidirse por el No, al calor del escándalo familiar del presidente es mínima⁴.

Es necesario recordar una vez más que los votantes bolivianos se comportan la mayor parte del tiempo, de una manera idéntica o muy parecida al electorado de otros países, es decir pragmáticamente, tratando de que su voto contribuya a mantener o mejorar condiciones favorables de vida. Si se ven así las cosas, resulta menos misterioso interpretar las tendencias que han predominado en los procesos electorarios de nuestro país.

Si nuestro comportamiento electoral tiene una peculiaridad, esta se encuentra en las recurrentes manifestaciones de autonomía social⁵, que se expresan en la capacidad de los votantes para zafarse de instructivos ideológicos y el control político, como lo ha comprobado el MAS de 2005 en adelante, cuando muchos de sus electores han optado por candidatos de otros partidos en elecciones subnacionales, o con el voto negativo de la elección de autoridades judiciales, o con el respaldo espontáneo a la autonomía departamental en 2009 y de rechazo a los estatutos departamentales del año pasado.

La fuerte raigambre histórica y social de este comportamiento hace que se pueda **detectarlo** desde la recuperación democrática; así, son expresiones de esta conducta la forma en que los campesinos votaron, pragmática y autónomamente, para introducir sus representantes en los municipios, a través de los partidos tradicionales que predominaban en la última década del siglo XX.

El éxito electoral del MAS en 2009 y 2014, está indisolublemente asociado a la bonanza vivida, que para la mayor parte de la población es atribuible a la gestión de gobierno, mientras que la historia de su ascenso en 2005 es completamente distinta, porque obedece a la dinámica de un cambio de ciclo constitutivo y la maduración del proceso constituyente que lo acompañó.

Este tercer ciclo estatal, heredero del 52 y motivado a cumplir las tareas no resueltas por su antecesor, ha conformado un bloque de poder en torno a fracciones campesinas (no indígenas),

³ El el cuadro de la encuesta realizada en abril último, correspondiente a la pregunta de si los encuestados temen perder sus trabajos el próximo año, se ve como la inquietud, paso previo a la incertidumbre, se filtra en la población urbana en lo referido a la estabilidad laboral, con un 50% de respuestas positivas, mientras que la sensación global frente a la economía y el futuro se mantienen optimistas.

⁴ Esta noción contradice la predominante, especialmente entre los partidos de derecha, de que el elector boliviano es más manipulable que el promedio, que responde a una dinámica de tropa y carece de capacidad para discriminar y seleccionar propuestas.

⁵ Una clara prueba de que la oposición tampoco entiende ni le interesa este comportamiento es que interpreta, invariablemente, los clásicos retrocesos de la votación del partido de gobierno en las elecciones regionales, como supuesta pérdida de terreno del oficialismo, lo que obviamente no es así. Pero, es peor su incomprensión de cómo se relaciona este comportamiento con la estructura autonomista de los principales sujetos sociales, al observar como los partidos borraron las consignas autonomistas de sus programas en la elección subnacional última, con la única excepción del candidato triunfante a la gobernación por La Paz.

con la participación de sectores urbanos, de ancestro campesino reciente, como son los cooperativistas mineros, los grandes importadores de electrónicos y otros bienes de consumo, los propietarios de transporte público, asociados, todos ellos, a militantes de clase media (jurados enemigos de su origen social) que se están convirtiendo en una nueva burguesía burocrática de Estado.

Lo cierto es que los resultados del referendo constitucional último, realizado por iniciativa y decisión exclusiva del MAS, golpean al nuevo bloque dominante, crisan sus relaciones internas y lo exponen a nuevas y mayores derrotas. Es por eso, que puede observarse que la tendencia central del proceso nace del resquebrajamiento hegemónico del partido político dominante y única fuerza política nacionalmente estructurada que es hoy, todavía, el MAS.

El certamen de la corrupción.

Para referirse apropiadamente a este enorme problema –nacional y mundial- conviene estar advertido que el relato de censura moral y moralista con que los opositores juzgan los actos corruptos de quienes offician de gobernantes, impresiona poco o nada al electorado, convencido por experiencia histórica que los escandalizados acusadores de hoy suelen ser, casi como regla, los ladrones de mañana.

La explicación de la intensidad y extensión que ha alcanzado la corrupción, no sólo en Bolivia, sino casi en la totalidad de gobiernos latinoamericanos y, especialmente con aquellos que adquirieron el marbete de progresistas, antiimperialistas, de izquierda o nacional-populares, hay que buscarla en el ascenso explosivo de ingresos que trajo la década de súper precios de las materias primas y en la laxitud e ineficacia tradicional de los controles, antes que en la filiación ideológica de los gobernantes, como trata de hacerlo creer la derecha más dura, o en su ascendencia étnica y cultural, como lo musitan las expresiones reforzadas del viejo racismo, ahora envalentonadas.

Si bien la corrupción a gran escala no es, en términos cronológicos y prácticos, la primera causa del debilitamiento gubernamental, tiende a ser, a mediano y largo plazo, la que vulnera más su imagen, confiabilidad y autoridad moral y, por lo tanto, su convocatoria.

La desaceleración económica, conjugada al empeño oficial en negarla, son la primera razón de la pérdida de credibilidad y posible desencadenante de su ruina, pero el análisis del retroceso mencionado desde el inicio de este documento, empieza con la corrupción, debido a que una parte sustancial del apoyo conquistado por el MAS se debía a la creencia de que su ascenso al gobierno, permitiría enfrentarla y, más optimistamente, hacerla retroceder⁶.

La acumulación de una verdadera montaña de denuncias previas, incluyendo redes de extorsión, contrataciones sobrevaluadas y fallidas, negocios en empresas estatales y otros ilícitos e irregularidades, se han condensado en este primer semestre del año y adquieren una nueva fuerza

⁶ Las principales encuestas de opinión sobre la corrupción gubernamental, fueron notoriamente favorables durante su primera gestión entre 2006 a 2009. Luego se fueron debilitando progresivamente, hasta recuperar los niveles observados con anteriores gobiernos.

y significado, después de que la estrategia hacia la reelección se estrellara contra la determinación democrática de los electores.

Esos antecedentes y la seguidilla de hallazgos que sugieren o prueban llanamente una constante falta de honradez en el desempeño de la administración del país, que van desde la falta de veracidad de los altos funcionarios, hasta la opacidad y las dudas que provocan mil millonarias contrataciones directas para la ejecución de obras públicas, adquisiciones dudosas de medios masivos de difusión, más los enredos entre consanguíneos y amigos, han terminado por crear una situación que conduce a que la población crea, resignada y frustrada, que no existen excepciones a la afición de los políticos para burlar cualquier control y edificar, o engordar, sus fortunas personales con el desvío de fondos públicos.

De todas las denuncias que se fueron apilando, desde que en febrero de 2009 fuese capturado el segundo hombre en importancia dentro la estructura orgánica masista por el caso Catler, la del Fondo campesino llegó a convertirse en la más emblemática⁷. Mientras que las noticias que tenían origen en los desmanes y desfalcos en esa institución financiera ocuparon por casi un semestre los titulares noticiosos en 2015, en este año pasaron segundo plano, cuando no se borraron sencillamente, opacadas por las novedades relacionadas con los negocios que se entrevén alrededor de una cantidad todavía desconocida de contrataciones directas ejecutadas por las autoridades⁸.

Es probable que esa situación no hubiese monopolizado la atención pública, si el presidente no apareciera en el centro del entramado, a partir de la denuncia que lo vinculó con la gerente de la compañías china CAMC, beneficiada con la adjudicación de contratos directos para ejecutar obras públicas. Es además indudable que la relevancia de esa noticia quedó garantizada, cuando el conjunto de medios de difusión masiva, se entregó a sus más básicos y esenciales impulsos constitutivos, explotando la morbosa curiosidad del público y relegando a un segundo plano, igual que la oposición partidista, la indagación de los ilícitos económicos.

A diferencia de los anteriores nueve años, los últimos hechos quiebran la invulnerabilidad del presidente frente a las permanentes denuncias de que el poder público se utiliza para privilegiar intereses grupales e individuales, continua y metódicamente, reforzando la percepción de que el régimen ha ingresado de lleno a un período de descomposición.

De estadísticas y aguinaldos.

⁷ La importancia que cobra depende, por un lado, de las cantidades comprometidas (más de 200 millones de dólares, según Ayo, mientras el presidente insiste en que no llegan a 3 millones y, por otro, de la documentación de los desembolsos que involucran a gran parte de la dirigencia de las “Trillizas” (las organizaciones campesinas: CSUTCB, Colonizadores y Bartolinas) además de las fracciones oficialistas de CIDOB y CONAMAQ.

⁸ “Desde 2006, el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) reporta **54.583 contrataciones directas** (las negrillas son mías), de las cuales más de la mitad fueron impulsadas por entidades del nivel central. Según la base de datos, a partir de 2006 también se realizaron 7.456 contrataciones por excepción, y **solamente** 18.641 licitaciones públicas y 153 invitaciones públicas. Del total de contrataciones directas, al menos 27.862 (50% del total) fueron ejecutadas por ministerios, empresas públicas estratégicas y otras entidades de la administración central. Mientras que en 2004, unos 600 mil Bs fueron asignados por contratación directa, en 2014 este monto llegó hasta **19.603 millones de Bs**” (“Página 7”, edición del 13 de marzo de 2016, p. 10. La Paz).

Las medidas con que el frente oficial se preparó para ganar o ganar el referendo plebiscitario del 21 de febrero, incluían en un puesto muy destacado el pago del segundo aguinaldo, e hizo en consecuencia todo lo necesario para presentar cifras que legitimen esa erogación (un crecimiento del PIB superior al 4.5%, según está legalmente dispuesto)

La administración no dejó de insistir en que durante la gestión 2015 se habría superado un crecimiento del 5% del PIB, hasta que el reciente 4 de mayo ha publicado la información de que se habría alcanzado el 4.83%, en contraste con las cifras de organismos internacionales⁹, que se quedan en 4.3 o 4,4%; cifra idéntica a la que pronostican para esta gestión.

Las décimas de diferencia de la gestión pasada, tenían en el momento de la campaña un significado mucho más grande de que si se paga o no el nuevo beneficio social, porque a través de ellas se dilucidaba el mantenimiento o caída del prestigio de la gestión económica, en los términos y alcances que definidos por el Gobierno nacional¹⁰.

Como los mensajes que predominaron en campaña estaban encaminados a transmitir confianza en lo ya conocido, en pos de fijar la idea de que el presidente y el vice constituyen una sólida garantía para mantener los niveles de consumo y bienestar, así como asegurar una nueva década de enormes inversiones, obras públicas y planes de avanzar, desde el rezago atávico a una presunta condición de “nueva potencia regional”, el 5 por ciento de crecimiento, venía a ser un requisito casi indispensable para el reforzamiento de la imagen triunfadora.

El aguinaldo adicional por sí mismo, aunque sólo se asegura a la minoritaria porción de asalariados “formales”¹¹ (es decir debidamente registrados en las cuentas nacionales y usufructuarios de los beneficios sociales legales) tiene, un alto valor simbólico y político porque representa el viraje con el cual los gobernantes se aproximaron, a partir año 2014, a este sector, que tiene una elevada capacidad de movilización opinión y movilización en las ciudades, por lo que la recuperación de terreno perdido por el MAS y su gobierno hasta hace 2 años con esa franja social fue decisiva para remachar la gran victoria electoral que obtuvo en 2014.

Los términos economicistas en que los dirigentes del MAS han concebido y manejado su relación con las fracciones de la clase media urbana, tanto tradicionales como las denominadas nuevas o “vulnerables”¹² son, de todas maneras, precarios y provisorios porque parten de supuestos manifiestamente falsos.

⁹Ver: http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla-pib-actualizacion_proyecciones_oct2015.pdf; también <http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/CAR042915AS.html>

¹⁰ Eso significa que crecer al 4.3% en 2015 y 2016, inclusive con un déficit público de 6.1% y de 953 millones de dólares en balanza comercial, sigue siendo un logro notable, al menos en términos “macro” y de estadísticas, al compararse con los rendimientos y de toda la región que ha ingresado a un segundo año de desaceleración.

¹¹ El indudablemente, rápido y consistente, avance de las relaciones capitalistas que ha ocurrido en Bolivia y toda América Latina durante la última década, se expresa en la continua ampliación del número de asalariados, **independientemente si los nuevos asalariados son “formales”** en términos jurídicos.

¹² En una crítica al Informe de Desarrollo Humano del PNUD, Gonzalo Colque, director de la fundación Tierra crítica la manera en que suele caracterizarse y utilizarse la idea de una “nueva clase media”, en el sentido que, categoriza erróneamente a un segmento de la “clase trabajadora”, sin tomar en cuenta la facilidad en que puede regresionar a la situación de pobreza de la que estaría emergiendo (de allí la denominación de “vulnerable”), lo que ayuda a apuntalar una deleznable imagen de políticas públicas exitosas. Ver <http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/674-la-ficticia-irrupcion-de-clases-medias-una-revision-critica-del-informe-2015-de-pnud>

De allí que, después de haberlo impuesto contra toda la resistencia empresarial el año pasado, sin que ello hubiese podido impedir perder los 700.000 votos que el partido oficial perdió el 21 de febrero¹³, comparados con la votación de 17 meses antes, causa una confusión tan grande entre los derrotados que no terminan de hilar una explicación, única y verosímil, de los acontecimientos¹⁴.

Ahora, que da vueltas y acaricia la búsqueda de una segunda vuelta o referendo reivindicatorio, se ha arriesgado a pronosticar que el beneficio volverá a pagarse a fin de este año, lo que no ha impedido la declaración de hostilidades por parte de la COB que ya suma dos paros nacionales y prepara un tercero, tras la bandera de la estabilidad laboral.

El hecho de que la eficacia de esta movilización tenga un impacto inmediato tan reducido (escaso acatamiento de la huelga, presencia callejera disminuida) no debe inducir a subestimar su importancia, porque carcome la imagen del Gobierno como único representante de lo nacional-popular y de los mal denominados “movimientos sociales”¹⁵.

Las desinteligencias con la COB se suman al crecimiento de las tensiones corporativistas, como consecuencia de la disminución del flujo de caja que permitía cubrir expectativas y exigencias de las organizaciones sociales que respaldan al Gobierno.

La “agenda patriótica” y los planes de emergencia.

La actual perplejidad del bloque oficial se traduce en la reiterada explicación de que su derrota se debe a un engaño, como repite el presidente, el personal cortesano y la mayoría de dirigentes nucleados en CONALCAM, que enfrentan problemas legales, actuales o en perspectiva, cuando vuelvan a avanzar las hasta ahora muy lentas o detenidas investigaciones sobre los desfalcos del Fondo campesino indígena¹⁶ y otros casos enterrados con la complicidad del aparato judicial.

En medio de esta confusa situación, el vicepresidente ha tratado de definir una fórmula para remontar el contraste: “Si logramos mantener el crecimiento económico e industrializarnos; si logramos convertirnos en centro energético; y (si seguimos) reduciendo la desigualdad y ampliando la ciudadanía económica para las personas, estaremos en mejores condiciones para

¹³ Votos urbanos en su gran mayoría y, muchos, de los asalariados que recibieron el doble aguinaldo.

¹⁴ Las justificaciones más constantes las ha proporcionado el vicepresidente y tienen que ver con la “ingratitude y la dudosa calidad moral” de un millón de nuevos “clasesmedios” (ver www.la-razon.com/.../animal_politico/lodo-alma_0_2477752275.html, también www.la-razon.com/nacional/entrevista-garcia_linera-Mas-Evo_0_2449555063.html); la unidad y las “mentiras” de la oposición, en referencia al affaire Zapata; la influencia de las redes sociales digitales, “manipuladas por tuiteros enviados directamente por el imperio”; la “migración” de dirigentes sindicales a cargos públicos, entre las principales. Otra aproximación, en la que se exponen más las dudas producidas en el oficialismo por su derrota puede verse en www.la-razon.com/.../animal_politico/derrotatactica_0_2448355152.html.

¹⁵ El MAS es un partido aliado con la dirigencia de **organizaciones sociales**, es decir instituciones permanentes, jerárquicas, sectorializadas, propensas a actuar corporativamente (egoísmo de grupo) en contraposición a los movimientos sociales, que son irrupciones espontáneas y momentáneas de descontento que no alcanza a ser canalizado por el sistema de representación política. En realidad, si a algo le teme el MAS es al surgimiento y desarrollo de movimientos sociales (como el que enfrentó el gasolinazo de 2010, o la oposición a la carretera por el TIPNIS, o movilizaciones regionales como la potosina).

¹⁶ Es muy importante destacar que en las últimas semanas, dirigentes de la CSUTCB, cuya cúpula esta tanto o más comprometida con ese desfalco al ser recipiente de grandes desembolsos, han declarado públicamente que ya no cabe insistir en la reelección y que debe más bien verse los relevos y nuevos candidatos que encabezarán la fórmula masista en 2019. Lo mismo ha expresado la dirigencia de la Federación cochabambina Bartolina Sisa.

afrontar la campaña de 2019” (ver www.notimerica.com/politica/noticia-vicepresidente-bolivia-asegura-mas-mas-debil-morales-20160307131744.html).

La fórmula parece sencilla, pero no lo es y resulta simplista en extremo, porque desatiende varias aristas, problemas y fuerzas que se encuentran en plena evolución.

Su primer y mayor problema es que se reduce al plano económico, cuya importancia es primordial, pero definitivamente insuficiente para comprender todo lo que pasa. Al final de cuentas, el MAS ganó la primera elección por la esperanza colectiva en transformaciones y no gracias a estímulos económicos. El creciente deterioro económico, por la baja de los precios de nuestras exportaciones, atiza los problemas, pero los conflictos políticos, éticos, de anhelos y expectativas traicionadas tienen una dinámica propia que pesa cada vez más en su declive hegemónico.

Por lo demás, las previsiones y propuestas estrictamente económicas de las autoridades. Contenidas en la “Agenda Patriótica”, presentan fallas manifiestas, que empiezan con los planes para solventar el hueco producido por la caída del precio de exportaciones, mediante préstamos de la China (entre 7.500 a 10.000 millones de \$us) y el uso de reservas internacionales para mantener un plan de inversiones públicas masivas, lo que funciona en el corto plazo, pero resulta completamente insuficiente si se prolonga –como es la tendencia actual- la brecha entre el promedio de 10 dólares que se estuvo cobrando por el millón de BTU y los 2.5 que se obtienen ahora. Ni siquiera las fuentes extraordinarias serán suficientes, mucho menos, si una parte de los recursos sigue escurriéndose a bolsillos de intermediarios y comisionistas.

La segunda parte de su plan consiste en el sostenimiento de una masiva inversión pública, aplicada a infraestructura y, principalmente, al campo energético con una inversión de unos 32.000 millones de dólares hasta 2025, para sostener las reservas de hidrocarburos y llegar a generar unos 8.300 MW de energía eléctrica que se exportarían en su mayor parte. La gran debilidad de la propuesta en materia hidrocarburífera se encuentra en el descenso de las reservas de gas y lo tardío e ineficiente de los planes exploratorios.

En cuanto a la exportación de electricidad, si bien los mercados argentino y brasileño pueden absorber fácilmente nuestra oferta, el financiamiento presenta serias interrogantes no resueltas, mucho más si la recuperación del precio de nuestros actuales productos de exportación es lento o vacilante. Adicionalmente, la construcción de las grandes represas que contempla el plan, implica desafíos ambientales (y sociales) que, para responderse, precisan de una confianza, convocatoria y credibilidad política que se están desmoronando. Pero, antes, está previsto construir nuevas termoeléctricas, cuando no se garantizan las reservas para de gas para hacerlas arrancar y mantener su funcionamiento.

Antes de poder alcanzar esa gran conversión de nuestras exportaciones, están los muy gelatinosos resultados de inversiones ya realizadas, como las de las plantas separadoras de gases, la de urea y polipropileno traen más preguntas que respuestas, principalmente en lo referido a mercado internacional y, otra vez, el costo de las plantas.

Otro conflicto de proporciones mayores es que, pese al recorte de ingresos y recursos, no se ha modificado la priorización de grandes y costosas obras urbanas (teleféricos, trenes urbanos) con

bajo impacto en la resolución de problemas como el transporte masivo y otras, como el generador nuclear de energía, simplemente dirigidas a apuntalar cosméticamente imágenes de “desarrollo”. En lo cotidiano, los presupuestos de todas las instituciones estatales continúan recortándose y los como resultado los despidos se han iniciado, con tendencia a hacerse mayores y más frecuentes en los próximos meses¹⁷. Al mismo ritmo proliferan las protestas de los contribuyentes por el celo excesivo, o el sesgo casi extorsivo con que se cobran y exprimen tributos, en un desesperado afán por equilibrar las cuentas.

El Gobierno parece olvidar, finalmente, que una de las principales razones para lanzar y fomentar la aventura del referendo, fue tratar de prevenir el coletazo que ya se esperaba por la caída del precio de las materias primas y legitimar los recortes y ajustes de los que aún no hablan los voceros, pero que ya sobrevuelan el ambiente.

El reduccionismo económico, que es parte de la impotencia de llevar adelante una transformación de la matriz productiva, es compañero inevitable del extractivismo y el desarrollismo primitivo en que se refugia la gestión económica¹⁸, cubriéndose, mientras pudo, de alguna predisposición redistributiva, que ahora entra en zona de riesgo.

El rompecabezas económico, con el que el Gobierno se propone superar todos sus problemas, se anuda con una trayectoria ideológica por la cual los gobernantes se han sacudido, con un alivio manifiesto, de su capa indígena y simultáneamente de amigo de la Madre tierra, habiendo archivado toda las tareas para modificar la estructura estatal, cuál era su mandato primigenio.

El práctico congelamiento y archivo de la reforma estatal, no sólo en sus componentes mayores referidos a la descolonización, el reconocimiento y apertura de espacio a todas las expresiones de pluralidad, al ejercicio de autonomías o control social, ha servido de prólogo a espacios de simple regresión, como ocurre con la descentralización, sofocada por una concentración creciente del poder y un deterioro de la siempre maltrecha institucionalidad, como se observa en la administración de justicia, el manejo de los aparatos de seguridad y represivos, unidos al quebrantamiento del respeto de derechos y garantías constitucionales.

Las “cumbre de la justicia”, ha concluido con el paupérrimo planteamiento de incremento y suma de penas, que aparentan ser una improvisación para permitir la apertura de una ventana a una nueva reforma de la CPE, en la que podría colarse la ilegal, ilegítima e inconstitucional “segunda vuelta”.

El resultado es una reforma que incrementa el sometimiento de los administradores de justicia al Ejecutivo y deja en desamparo a la población que se atreva a recurrir a ellos. La frustración y

¹⁷ En relación a este tema, la experiencia de la última década ha mostrado una inflación enorme de las planillas públicas centrales y subnacionales y, junto con ella, un deterioro constante de la calidad del empleo, porque se ha impuesto la corriente de contratar “consultores”, sin beneficios, sin estabilidad, con derechos laborales recortados. Es una década en que el Estado se ha exhibido como un patrón con los peores hábitos y tics neoliberales en materia de empleo.

¹⁸ Lo que no debe olvidarse es que pese a tales limitaciones, la política económica boliviana, lleva nítida ventaja a varias otras (tanto de gobiernos de izquierda, como neoliberales) y ha esquivado hasta ahora el empujón de la caída del precio de materias primas y el repliegue chino. El pragmatismo del electorado se explica por lo anterior, la estabilidad financiera, las medidas redistributivas y otras que la oposición partidista se niega a reconocer y acreditar, pero que convierten a este gobierno, a los ojos de una gran cantidad de votantes, en el mejor que han conocido en su experiencia de vida.

sentimiento de derrota moral que tiende a acarrear tal situación puede tener un alcance devastador.

Es notable como en este contexto ningún partido ha asumido la defensa frontal y concluyente del pronunciamiento del soberano en el último referendo, confiando, aparentemente, que les corresponde a “expertos” constitucionalistas ocuparse del asunto. Hasta ahora esos especialistas se han mostrado vacilantes y dubitativos¹⁹, cuando hablan de que “el camino (para un nuevo referendo) no está claro”, o que la CPE es contradictoria.

El control de 2/3 del Legislativo no se ha usado para regularizar los altos cargos y gerencias estatales, sino que se han mantenido interinatos y cuando toca regularizarlos, como pasa con el nombramiento próximo de Contralor y el nuevo Defensor del Pueblo, se ratifica que los gobernantes privilegian la lealtad y subordinación partidaria, sobre cualquier otra consideración.

Escenarios prospectivos y la oposición partidista

El 53% de votos adversos que cosechó el régimen en febrero, no ha alcanzado para persuadirlo de la necesidad de un ajuste y, menos, de un viraje.

Eso significa que las autoridades continuarán simulando que la desaceleración no nos afecta, y pretenderán demostrarlo manteniendo vigente un programa de grandes inversiones, sin consenso con los actores económicos y sometido a los sobrecostos de intermediarios corruptos (estatales y privados), con el agravante de un rápido avance del endeudamiento externo, sin el respaldo de una transformación productiva, ni del incremento de la productividad nacional.

La ausencia de alternativas de negociación y acuerdo, estimula la sucesión de escenarios en los que se fortalecen la exacerbación de conflictos, incrementando el costo y sufrimiento para todos los actores, excluyendo, quizá, a los más privilegiados.

Antes del referendo la sobrevivencia del régimen por al menos dos nuevas elecciones nacionales, tendía a imponerse sobre sus rivales partidarios conocidos, inclusive con una fórmula encabezada por un candidato que no fuese Morales Ayma²⁰. Ahora, esa opción queda prácticamente descartada, sin que el MAS encuentre una fórmula satisfactoria para neutralizar su derrota. Peor aún: la vía de ensayo-error que transita para descubrirla está incrementando su debilidad y corroyendo la peculiar forma de gobernabilidad que ha predominado hasta ahora.

El factor que no se ha modificado es que los partidos que pretenden reemplazarlo se encuentran demasiado lejos de alcanzar la masa crítica para concentrar los votos suficientes y, menos todavía, para encarar una gestión jaqueada por agentes del MAS, encaramados legalmente en gran parte de gerencias estatales estratégicas y otros puestos de mando; por una bancada opositora numerosa y una dirigencia corporativa en pie de guerra.

¹⁹ Entre las aisladas excepciones se encuentra una publicación de Ricardo Calla O., en la sección de Opinión del matutino “Página Siete”, este último domingo 27 de junio.

²⁰ Esto, en el supuesto de que el presidente apuntale con firmeza a su reemplazante, bajo el esquema utilizado por JD Perón cuando escogió a Héctor J. Cámpora para sustituirlo en las elecciones de 1973. La defensa de la figura presidencial ha incinerado a los cuadros que podían aspirar a tener ese papel y las supuestas opciones como las del canciller, dan signos de insuperables debilidades internas y externas.

Los partidos opositores siguen demostrando que son incapaces de asumir que sus posibilidades de ganar permanecerán petrificadas, mientras no comprendan que necesitan ensamblar una plataforma capaz de atraer a una franja significativa –mejor si mayoritaria- de actuales votantes del oficialismo y que eso pasa por tener la capacidad de rescatar las reformas inconclusas o abandonadas; no negarlas taimadamente, como es la tendencia predominante entre esos partidos y las precarias coaliciones que logran conformar.

No existe un partido opositor con verdadera presencia y arraigo nacional y la agregación de popularidades locales y regionales no alcanza para constituir un rival de peso; mucho menos con la precariedad ideológica de todos ellos, que no hace sino empeorar cuando se ensamblan sobre acuerdos exclusivamente electoralistas.

De momento ninguno parece interesado en reflexionar sobre las metas incumplidas y que se hallan inscritas en la CPE, su pertinencia, actualidad y la manera en que se pueden aplicar y proyectar es una posible herramienta para establecer balances, fijar rutas, etapas, alianzas de esa gran mayoría democrática que animó el proceso constituyente y que vive un distanciamiento creciente de los grupos e individuos que llegaron a conformar la herramienta a la que se confió la conducción del proceso. El hundimiento del Movimiento sin Miedo, que fue el único partido que intentó explorar esta ruta, sin que se haya establecido un balance exhaustivo de las causas de su desaparición, tiende a estimular el oportunismo y el enfoque tecnocrático, con resultados más que dudosos a mediano plazo.

Una resistencia democrática consistente y rebotante de convicción²¹ es apenas el primer paso para construir alternativas reales, que no naufraguen ante el primer empujón de una verdadera contraofensiva. Se precisa al mismo tiempo encarar un rearme y fortalecimiento ideológico, el uso de herramientas científicas para formular análisis y propuestas y la apertura a la vigilancia social, más allá del resultado de las elecciones.

En cuanto a la sociedad civil es indispensable que recupere la independencia de las organizaciones acopladas a la maquinaria estatal y hoy sumidas en una crisis de corrupción y burocratización mayúscula. Indudablemente, es esta una responsabilidad de las bases de esas estructuras y, por lo tanto, su ritmo y amplitud, tanto como la calidad de los cambios individuales y organizacionales que puedan darse, dependerán de la acumulación previa y la calidad de los actores que se estén formando ahora mismo.

²¹ Que no tiene otro camino que una democratización interna seria y consistente, con la transparentación de cuentas e ingresos partidarios, así como un seguimiento y rendición de cuentas de los cuadros que ostentan cargos públicos.